



**JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DEL CIRCUITO DE
BOGOTÁ
-SECCIÓN SEGUNDA-**

Bogotá D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021).

Expediente: 1100133350-26-2017-00129-00

Demandante: SANDRA MILENA TIBAUDIZA PULIDO

Demandada: LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Ingresa el expediente de la referencia al Despacho con solicitud conjunta elevada por la parte demandante y demandada solicitando la corrección por error, de la providencia emitida el día 29 de septiembre de 2020, a través de la cual el Juzgado Segundo Administrativo Transitorio de la época, procedió a aprobar el acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes en audiencia del 20 de agosto del mismo año.

Los señores apoderados esbozan argumentos para su pedimento, soportados en sentencia de segunda instancia proferida por el H. Consejo de Estado de fecha 19 de noviembre de 2020 (Radicado 25000-23-15-000-2020-02426-01), a través de la cual, se resolvió acción de tutela a favor del demandante contra el Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, atendiendo que este despacho judicial, al resolver una solicitud de corrección de la providencia que aprobó un acuerdo conciliatorio, modificó la fecha de ejecutoria de la misma lo que generó en su momento según la demanda un perjuicio para el actor, debido a que el cómputo de los intereses de mora del acuerdo, se iniciarían desde la fecha de ejecutoria del auto que corrigió la providencia y no desde la fecha en que fuera inicialmente aprobado el acuerdo conciliatorio.

De manera concreta en la parte final del memorial las partes solicitan:

“1. Corregir el error aritmético detectado en la liquidación de la conciliación que se aprobó mediante auto notificado por estado del 30 de septiembre de 2020 en el proceso de la referencia, demandante: Sandra Milena Tibaduiza Pulido, en el sentido de aprobar el acuerdo conciliatorio con fundamento en el Acta de Comité de Conciliación de fecha 19 de mayo de 2021, (conforme con la Certificación No. 0493-2021 expedida por la Secretaría Técnica del Comité Técnica (sic) del Comité de Defensa Judicial y Conciliación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial); es decir, siendo el valor total correcto la suma de ciento veinticinco millones setecientos treinta y un mil doscientos cuarenta y cinco pesos (\$125.731.245)

“2. Mantener la decisión adoptada el 30 de septiembre de 2020, de conformidad con lo establecido en el Consejo de Estado y en aras de mantener la seguridad jurídica y la cosa juzgada”.

“(…)”

Cuestión Preliminar

Considera este Juzgado relevante destacar que la petición tendiente a que se corrigiera la providencia del 29 de septiembre de 2020, a través de la cual se dispuso aprobar el acuerdo conciliatorio al que llegaron las partes en el proceso de la referencia, fue objeto de decisión el pasado 6 de mayo de 2021, con auto debidamente notificado y que no fue objeto de recurso u objeción, quedando ejecutoriada y en firme.

Sin embargo, nuevamente las partes acuden para que se analice la procedencia de la medida correctiva, pues a su juicio, sí se reúnen las condiciones, para lo cual aportan la providencia de tutela emanada del H. Consejo de Estado de fecha 19 de noviembre de 2020 (Radicado 25000-23-15-000-2020-02426-01). En esa medida, pese a que la decisión sobre la corrección ya fue negada, y que la decisión se encuentra en firme, este Despacho analizará los argumentos expuestos por los sujetos procesales, en aras de garantizar su derecho al acceso a la administración de justicia y el respeto de los principios que la rigen.

De la improcedencia de la corrección planteada.

Las partes argumentan que, el artículo 286 del Código General del Proceso posibilita la corrección de providencias cuando se ha incurrido en un error puramente aritmético pese a que la providencia goce de los efectos de la cosa juzgada, pues, la corrección no modifica tal situación.

Consideran además, que el Comité Nacional de Defensa Judicial y Conciliación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial decidió por unanimidad que en el presente proceso debía proponerse fórmula conciliatoria, pero que con posterioridad luego de aprobado el acuerdo, el área contable de la entidad evidenció un error aritmético concretado en las siguientes falencias:

1. No se calcularon las prestaciones sociales del año 2017.
2. No se dividieron 19 días del mes de junio de 2018 de la reliquidación de las prestaciones sociales.
3. La sumatoria de la liquidación de la cesantía en el año 2018 no debieron ser tomadas en cuenta.

Tales yerros generados por la entidad accionada generaron que, el Comité Nacional de Defensa Judicial y Conciliación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial procediera en el año 2021 (Certificación No. 0493-2021) a considerar procedente MODIFICAR la decisión adoptada por ese organismo teniendo en cuenta que la suma real a conciliar ascendía a CIENTO VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$125.731.245) y no en la suma que fue conciliada esto es, OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO NUEVE PESOS (\$88.127.109).

Consideran que la decisión en concreto es la misma, esto es, el reconocimiento del derecho es idéntico al conciliado, solo que, las liquidaciones eran indetectables al ojo común y por lo tanto el yerro puede ser corregido con la emisión de una providencia que indique la cifra correcta que asciende como se indicó a CIENTO VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$125.731.245).

Pues bien, se tiene que, la normativa aplicable a la conciliación prejudicial y judicial, esto es Ley 1437 de 2011, Ley 640 de 2004 y Ley 446 de 1998, no consagran la posibilidad de realizar correcciones a la providencia que aprueba el acuerdo conciliatorio, lo que impone la necesidad de

acudir al Código General del Proceso como norma supletoria ante el vacío normativo. El artículo 286 del Código General del Proceso, establece:

“Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto.

Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará por aviso.

Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutive o influyan en ella.”. (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Así las cosas, reexaminado el asunto se considera que en este asunto el fallador no efectuó cálculo alguno, ni operación aritmética, ni transcribió erróneamente un número, es decir, no existe posibilidad de endilgarle el error al Juez en la emisión de su providencia, pues la aprobación se dio en el marco de la liquidación que fuera realizada y aprobada por el Comité Nacional de Defensa Judicial y Conciliación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (Certificación No. 0975 del 19 de agosto de 2020) y que con posterioridad fue objeto de presentación por parte del apoderado de la entidad demandada y aceptación por parte del señor apoderado de la accionante.

Lo que evidencia el Despacho, es que bajo el amparo de la corrección por error aritmético se pretende Modificar la decisión judicial de forma sustancial, pues, conforme lo informa la solicitud se dejaron de incluir conceptos salariales, períodos de tiempo, y elementos prestacionales que no se incluyeron, posiblemente por un yerro, pero que no de aquellos que puedan ser objeto de solución a través de la corrección aritmética de que trata el artículo 286 del Código General del Proceso.

Por eso, se estima que exigirle al Despacho que corrija el error aritmético, sin que exista sustancialmente, es subordinar conceptos trascendentales del acuerdo conciliatorio, como son la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pues únicamente procede la corrección de yerros que se cometan pero que no tengan una incidencia sustancial. Esta posición no busca torpedear los derechos de las partes, sino de darle el alcance a la providencia que aprobó el acuerdo de haber dado por terminado el proceso, que dicho sea de paso ya fue objeto incluso de archivo.

Realizar la corrección, indicando que se cometió un error judicial, cuando no lo hubo, pues a través de la aprobación impartida se honró la voluntad de las partes quienes estaban en la audiencia debidamente representadas por profesionales del derecho, corresponde a una actuación que no sería recta, en la medida en que no es una situación imputable a la administración de justicia y que se reitera busca modificar sustancialmente los elementos de la conciliación; además buscando descansar la responsabilidad en el operador jurídico de la falta de cumplimiento de un acuerdo que fuera aprobado hace ocho (8) meses.

El tema de la corrección de las providencias es un mecanismo procesal otorgado por el legislador que se constituye en una herramienta importante en el buen suceso de la correcta administración de justicia, tal y como lo ha dispuesto el H. Consejo de Estado en inveterada jurisprudencia. Al respecto, se transcriben apartes de providencia emitida por el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en la que indicó la imposibilidad del juez de modificar la decisión objeto de aclaración, adición o corrección. Los términos son los siguientes:

“(…)”.

De conformidad con el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, la corrección de providencias judiciales procede en “cualquier tiempo” de oficio a petición de parte, frente “errores de tipo aritmético” en que haya incurrido el respectivo funcionario judicial, o también cuando en la providencia se incurra en yerro por “omisión o cambio de palabras o alteración de éstas” y siempre y cuando las mismas estén contenidas en la parte resolutive

o influyan en ella. En tanto mecanismo útil para que el juez simplemente enmiende erratas aritméticas o de palabras, al juez le está vedado, así como también en las figuras de aclaración y adición de providencias efectuar consideraciones de tal naturaleza que comporten una reforma o revocación de Procedimiento Civil “La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció”. (negrillas fuera de texto).

“El mecanismo procesal de al corrección de providencias judiciales procede frente todo tipo de providencias judiciales, es decir tanto respecto de autos como de sentencias, su decisión debe estar contenidas en un auto susceptible de los mismos recursos que procederían contra la providencia corregida, y este deberá ser notificado por aviso en caso de que el proceso haya terminado”.

Bajo las consideraciones expuestas, tal y como fuera expuesto en la providencia del 6 de mayo de 2021, no evidencia el juzgado que exista alguna configuración de error judicial, ni tampoco una situación de yerro que posibilite la corrección aritmética pues lo que se evidencia es una modificación sustancial a la providencia que puso fin a un proceso ordinario que se encuentra terminado; situación que a juicio de este despacho, afectaría los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica y las formas propias de cada juicio.

De la providencia proferida por el H. Consejo de Estado aportada por las partes.

Finalmente, considera importante el juzgado destacar que analizada la sentencia de tutela proferida el 19 de noviembre de 2020, que fuera aportada por las partes y que sustenta argumentativamente su pedimento de corrección, no se evidencia que los fundamentos fácticos y jurídicos sean de identidad a la situación planteada, de hecho, resultan disimiles pues si bien hacen referencia a un proceso donde se corrigió la providencia que aprobó el acuerdo conciliatorio, las razones de la acción de tutela y de la sentencia que amparó los derechos en sede constitucional lo fueron en virtud de la modificación a la fecha de ejecutoria de la decisión, no en virtud de la negativa de corregir una providencia judicial.

Este despacho en consecuencia se aparta de los respetables argumentos de los procuradores judiciales de la parte actora y accionada, bajo el considerando que no ha existido vulneración al derecho al debido proceso, derecho de defensa, de acceso a la administración de justicia; pues considera que en el presente asunto existe ya decisión de fondo (auto aprobatorio de la conciliación) que no fue objeto de recursos por parte de los interesados, que no puede ser revivida ni siquiera bajo el amparo de la corrección solicitada.

En mérito de lo expuesto, el Juez Segundo Administrativo Transitorio de oralidad del circuito judicial de Bogotá D.C.

RESUELVE

Primero. Negar la solicitud de corrección de la providencia del 29 de septiembre de 2020, elevada por las partes, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notificar la presente decisión haciendo uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para lo cual se dispone remitir correo electrónico a las cuentas debidamente registradas por los sujetos procesales en el expediente, así:

Parte	Dirección electrónica registrada
Abogado parte demandante: Dr. Daniel Sánchez Torres	danielsancheztorres@gmail.com

Abogado parte demandada: Dr. Jhon F. Cortés Salazar	jcortess@deaj.ramajudicial.gov.co
Procurador 195 Judicial Delegado Dr. Mauricio Román Bustamante	Procjudadm195@procuraduria.gov.co

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

CLEMENTE MARTÍNEZ ARAQUE
Juez

Firmado Por:

CLEMENTE MARTINEZ ARAQUE
JUEZ

**JUZGADO 02 TRANSITORIO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-
BOGOTÁ, D.C.**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
21681d6d31890dddd95beeb342c5444880b3951031e4d4808ec7d85dee6f1e39

Documento generado en 28/07/2021 05:19:24 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>